



Huelga del bono SAE: otra cara más de la crisis de la enseñanza municipal

El conflicto que se originó en la Quinta Región, con algunos miles de profesores movilizándose en dependencias del gobierno, podría haber despertado algunas sospechas en su inicio. Más todavía cuando aparecieron marchando junto a ellos quince alcaldes de la región,

al parecer arrebatando el protagonismo.

Pero hoy, tres semanas después, ciertos hechos hacen ineludible un análisis más profundo de la huelga nacional de los docentes por la deuda del bono SAE. Prácticamente todos los establecimientos municipales del país llevan más de quince días en paro, y se habla de 1 millón 500 mil escolares sin clases, cifras inéditas desde la rebelión pingüina de 2006.

En qué consiste el conflicto

Una revisión rápida de la demanda de los profesores muestra su legitimidad, rayando en lo básicamente digno. Las leyes 19.410 y 19.933 son las que regulan el pago del Bono Subvención Adicional Especial (SAE), un pago extra que deriva de un porcentaje que reciben los sostenedores del subsidio pagado por el Estado bajo una lógica redistributiva.

Según la ley, los sostenedores del sistema escolar deben destinar el 80% de la subvención enviada por el Gobierno al pago de los profesores. El 20% restante se guarda mes a mes. Seguido de esto, de haber excedente de un año debe ser repartido a la planta docente mediante la siguiente fórmula: lo que sobre se divide por la cantidad de horas trabajadas del total de profesores, en el caso de un establecimiento equis. Ese resultado se multiplica por la carga horaria de cada docente.

Datos fundamentales para entender cómo se llegó a la huelga son: a) el sostenedor debe pagar el bono a fin de año, no importando si es que el dinero haya llegado efectivamente desde el Mineduc. Esto ya entrega una cuota de responsabilidad a los municipios en el actual conflicto; b) Es competencia del propio ministerio el fiscalizar a los sostenedores por la entrega del bono. Como éste se adeuda tanto del 2007 como del 2008, le correspondía sancionar a los municipios por la deuda; c) En distintas instancias, la Contraloría General de la República, la Dirección del Trabajo y el Departamento Jurídico del Ministerio de Educación han reconocido la existencia de la deuda y la obligatoriedad de su pago.

Los montos consistirían en 500 mil pesos anuales para un docente con 30 horas promedio. Por eso se habla de una deuda de aproximadamente un millón de pesos.

¿Por qué entonces no surgió la demanda ya el año pasado? Solo podemos aventurar que, en realidad, se había vuelto costumbre que los municipios, en el contexto de la crisis del financiamiento de las escuelas y liceos municipales, descontarán todo tipo de bonos y pagos que les permitieran ya fuera mantener en pie a duras penas estos establecimientos –en la mayoría de los casos-, o sencillamente estafar a los trabajadores de la educación, como comúnmente ocurre en la enseñanza particular subvencionada (pero no exclusivamente).

En cambio, hoy se ha levantado una huelga general en todo el país, con una adhesión en el sector público en más del 90%, quienes además se organizan mediante comisiones de movilización, las que programan las formas en que se manifestará el profesorado. Una de estas jornadas fue la presencia del gremio en la marcha del 21 de mayo en Valparaíso, ante el discurso de la presidenta de la República, concentrando a representantes de los profesores provenientes de todo el país.

El movimiento en las bases

La instrumentalización que se observó en un principio de la demanda de los profesores, por parte de los municipios, fue dejándose de lado ante la rápida adhesión del conjunto de los docentes de la administración municipal. Y aunque, por antonomasia, el Colegio de Profesores asumió la conducción de la huelga, ciertos rasgos de ella han demostrado un auténtico interés de las bases por cumplir sus demandas.

Una primera señal fue –y es- la alta adhesión al movimiento: más de 80 mil docentes en paro de actividades. Luego, la contundente votación nacional del 28 de mayo, en que las bases rechazaron la fórmula de pago acordada por el Magisterio con el gobierno, que establecía el pago de la mitad de la deuda en dos cuotas durante 2009, y la otra mitad el 2010, dejando la aprobación de este pago en manos del Parlamento. La exigencia actual es el pago del total, en dos cuotas, este año.

Durante esta semana se ha visto quizás el peak de las movilizaciones, con la asistencia de más de 10 mil profesores a la concentración del Parque Forestal (el Magisterio habla de casi 100 buses provenientes solo de las regiones octava y quinta) y el anuncio en al menos dos comunas, Estación Central y Copiapó, del inicio de huelgas de hambre por parte de profesores.

**HUELGA NACIONAL
DEL MAGISTERIO**

Martes 2 de Junio:
**Marcha Nacional
por la Dignidad Docente**
12 hrs., Parque Forestal

Colegas.
Para considerar:

1- Los buses del norte, se concentrarán en Til-Til, carretera km. 38, Huertos Familiares, coordina Juan Puño, fono 9-4449022, para luego entrar en caravana a Santiago

2- Los buses del sur, se concentrarán en San Bernardo, liceo Fidel Pinochet, A-127, calle Bulnes 984, Nogal con Plaza Guarelio. Liceo Industrial B-12, calle 12 Febrero, esquina Freire, coordina Jaime Toro, fono 8-5022472 - Eliana Cáceres fono 9-7262608

3- Lugar de llegada a la concentración.
Del norte llegan a Estación Mapocho, estacionan en Av. La Paz y Parque Forestal.
De Valparaíso llegan a Estación Mapocho, estacionan en Parque Forestal.
Del sur llegan a Plaza Italia, estacionan en Parque Bustamante.

Comisión Movilización

Aunque el movimiento no ha alcanzado niveles de radicalidad de otros movimientos sociales, se explica que una demanda tan sencilla y lógica como la deuda de un monto importante del sueldo, tenga tan amplio apoyo. Contando, además, con que sus pares del sector particular subvencionado tienen otras condiciones laborales y de asociación sindical, coartando sus posibilidades de articulación. Sencillamente, si pararan, terminarían en la calle. Pese a ello existen varios los establecimientos particulares subvencionados, en Santiago y provincias, actualmente en paro.

El apoyo del mundo social

Los intentos del Ejecutivo de desarticular la huelga han sido liderados, como era esperable, por la ministra Mónica Jiménez (ex rectora de una universidad privada), quien persiste en su política de oídos sordos y represión. No sólo se fue de gira a Europa durante el conflicto, delegando las negociaciones al subsecretario, sino que sus únicas intervenciones públicas refiriéndose al tema han sido llamados a boicotear y deslegitimar la demanda (pidió que se volviera a clases “con o sin profesores”, lo que resulta un contrasentido), aún cuando otras instancias gubernamentales han ratificado su validez.

De hecho, han amenazado con que desde el jueves debiera empezar a pagarse la primera cuota del bono SAE, según decisión unilateral, para lo cual ya derivaron los recursos a los municipios. Aquellos profesores que no aceptaran este pago y siguieran en paro, sería descontados en sus remuneraciones por día no trabajado y sumariados.

Incluso, Jiménez pretendió lograr un efecto dominó al convocar a un grupo muy minoritario de apoderados a llevar, a pesar del paro, a sus hijos e hijas a clases. Por el contrario, las organizaciones de padres y apoderados han respondido apoyando la demanda de los pedagogos, al igual que muchos centros de alumnos.

En Tocopilla, la Unión comunal de Padres y Apoderados marchó junto a los profesores, unos 300 en total, el 2 de junio pasado. También su homólogo del liceo Confederación Suiza manifestó su solidaridad con el movimiento: “Como padres queremos remuneraciones y condiciones dignas para ustedes, porque de esta manera también estamos mejorando las condiciones de la educación para nuestros hijos”. A ellos se les suma la Asociación Metropolitana de Padres



y Apoderados, AMDEPA, que advirtió al gobierno que de no resolverse dentro de la semana el conflicto a favor de los docentes, los acompañarían en sus movilizaciones.

A este apoyo cabe sumarle el de la CUT, ANEF y la ANDIME, que agrupa a los

funcionarios del Mineduc, quienes a su vez se encuentran en conflicto salariales con el Ejecutivo.

El trasfondo

Tal como declaró el director de OPECH a La Nación, en edición del lunes 1 de junio, lo que realmente se pone en tela de juicio es la capacidad que tienen los municipios de hacerse cargo de la educación pública: “El tema no es que si ya se pasó la plata a los municipios y éstos la gastaron en otras cosas. El problema de fondo es que el modo en que se está haciendo la educación pública atenta contra el derecho de educarse”.

Los propios municipios han advertido, en múltiples oportunidades –aunque con otros fines-, que bajo el actual financiamiento les es imposible administrar los establecimientos escolares y que tarde o temprano los terminarán devolviendo al Estado, como un “cacho” del que ya no quieren hacerse cargo.

Es ahí donde radica el problema: la educación pública chilena no puede seguir siendo un “cacho” que se “pelotean” unos con otros. El mundo social hace rato que evidenció que no sólo es un problema de financiamiento, sino estructural: de administración, de derechos, de lógicas que lo subyacen. Repetidas veces se ha visto cómo los únicos municipios que se declaran “exitosos” es porque cuentan con muchos más recursos, a diferencia de la mayoría que ocupa fondos de otras reparticiones para solventar sus escuelas. Qué decir de pagar bonos SAE.

Este episodio vuelve a ratificar la crisis de la educación municipal. Los llamados a retomar las clases e incluso sacar a los estudiantes de los colegios municipales y matricularlos en particular subvencionados, más allá de los intentos por boicotear las movilizaciones, son el fiel reflejo de un sistema público abandonado, con su imagen –ideológicamente hablando- por el suelo y materialmente haciendo agua.

Múltiples expertos repiten que una de las condiciones básicas para una educación de calidad, es precisamente garantizar un trabajo digno a los educadores. Sin embargo, la continua precarización de los docentes hace imposible revitalizar estos establecimientos que, hoy, cumplen exclusivamente el rol de representar la educación pública en Chile, y esta crisis ha demostrado que tampoco los municipios son capaces de sostener dicha función. Corresponde, entonces, retomar el verdadero debate que se esconde detrás de estas demandas gremiales: la administración de la educación pública chilena.

Éste es un problema que no ha querido ser resuelto por la clase política, a pesar de tener las herramientas para ello. La propuesta de desmunicipalizar y traspasar las escuelas al Estado para una administración descentralizada y participativa de la comunidad, está sobre el tapete hace años. La necesidad urgente de construir comunidades educativas empoderadas y de luchar por una

nueva forma de educar y aprender, más liberadora, sigue pendiente. Pero hoy, los trabajadores de la educación se ven obligados a recurrir a los mecanismos de presión que son la única forma de recuperar su dignidad. El resto, nos vemos en la obligación de preguntarnos si es posible que la crisis de la educación persista, y hasta cuándo.

Observatorio Chileno de Políticas Educativas
“El Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública”